

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

I. ANTECEDENTES

- 1.1 El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) es una entidad pública descentralizada del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y patrimonio propio. Fue creado en octubre de 1996, mediante la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria. El INRA es el órgano técnico-ejecutivo encargado de dirigir, coordinar y ejecutar las políticas establecidas por esta ley. Sus funciones incluyen las siguientes: ejecutar el saneamiento de la propiedad agraria, redistribuir tierras, emitir títulos de propiedad de la tierra y construir el catastro rural. También es responsable de planificar, ejecutar y consolidar el proceso de reforma agraria en el país, con la misión de reorientar el proceso agrario en la perspectiva de las mayorías rurales del país en procura de una transformación de la estructura de tenencia de la tierra en Bolivia.
- 1.2 En la vida institucional se distinguen dos etapas; una primera (entre 1996 y 2006) en la que el INRA es concebida como una entidad pequeña, con poca capacidad operativa y que debe tercerizar el saneamiento de tierras. Es una etapa en la que asigna al INRA un bajo perfil, pues el tema tierras no es prioridad de los gobiernos de la época. Durante esta etapa el INRA ha saneado y titulado una superficie de 9.2 millones de hectáreas.
- 1.3 La segunda etapa empieza en 2006 y se extiende hasta la actualidad. Durante esta etapa el gobierno tiene la voluntad política de abordar el tema de tierras. Es la etapa en la que el INRA pone fin a la tercerización del saneamiento y desarrolla su capacidad para asumir esta tarea directamente. Se mejoran la metodología y los procedimientos para el saneamiento, se agilizan los procesos y se bajan los costos. Se sientan las bases para desarrollo del catastro rural y para emprender nuevos programas de asentamientos humanos. Durante esta etapa se han saneado y titulado 64.4 millones de hectáreas, con un total de 1.5 millones de beneficiarios con títulos emitidos.
- 1.4 El Banco y el Gobierno de Bolivia tienen una larga historia de colaboración en la formalización de la tenencia de la tierra, catastro, titulación y registro de tierra rural. El Banco ha apoyado al país en el saneamiento, registro y titulación de propiedades rurales desde el año 2002 con dos operaciones (1099/SF-BO y 1512/SF-BO). Con estas operaciones se lograron sanear más de 19.4 millones de hectáreas. En la actualidad, el 69% de la superficie del territorio nacional se encuentra saneado, distribuido entre diferentes categorías de tenencia de la manera descrita en el cuadro siguiente (véase también las secciones III y IV para mayores detalles sobre las diferentes formas de tenencia).

1996-2014		
Clasificación	Superficie(ha)	Nro Títulos
Empresa	4.317.185	1.093
Mediana	2.555.528	2.486
Pequeña	6.553.590	630.015
Propiedad Comunal	11.763.154	16.686
Sin Clasificación	26.820	44
Solar Campesino	2.521	2.722
TIOC	23.949.208	489
Tierra Fiscal	24.581.398	-
Total	73.749.405	653.535

- 1.5 Las principales áreas remanentes a sanear y titular consisten en pequeñas propiedades individuales y tierras de comunidades de origen Aymara y Quechua en la región andina (en particular en los departamentos de La Paz, Potosí y Cochabamba); y pequeñas, medianas y grandes propiedades en las tierras bajas (en particular en los departamentos de Santa Cruz y Beni). Aunque la mayoría de los Territorios Indígena Originario Campesino (TIOC) se encuentran en estado avanzado de titulación, se requiere todavía titular áreas remanentes donde existen conflictos con terceros.

II. DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES DEL PROYECTO

- 2.1 **Objetivo.** El objetivo del Programa es incrementar la seguridad jurídica de la propiedad rural. Como resultado del Programa se espera: (i) sanear y titular 24.5 millones de hectáreas; (ii) inscribir en el DDDR de los derechos de propiedad de 1,340,000 parcelas de pequeños productores rurales, lo que beneficiará aproximadamente 496,000 familias; (iii) sanear y titular los territorios indígenas pendientes; (iv) modernizar los sistemas de información catastral y registral; (v) fortalecimiento institucional para mejorar la gestión ambiental y social de la tierra. El impacto esperado del Programa será incrementar la productividad agropecuaria, los ingresos de los pequeños productores rurales y la sostenibilidad del uso de las tierras tituladas.
- 1.1 **Componente 1: Saneamiento, titulación y registro de tierras rurales.** Este componente apoyará el saneamiento, titulación y registro de las tierras rurales de Comunidades Indígenas Originarias Campesinas (CIOC), Territorios Indígenas Originarios Campesinos (TIOC) y pequeños productores rurales. Para apoyar el saneamiento, titulación y registro de la propiedad rural se requiere financiar las siguientes etapas del proceso:
- a. Etapas Preparatoria. En esta etapa se apoyarán las siguientes actividades: evaluaciones previas de las características de las áreas objeto de la intervención, preparación del informe de diagnóstico técnico y legal, densificación de puntos geodésicos, y desarrollo de la programación de las actividades de campo en las zonas de intervención del Programa.
 - b. Etapas de Campo. En esta etapa el Programa apoyará las siguientes actividades: difusión del proceso de saneamiento, identificación y señalización de los vértices y linderos, suscripción de actas de conformidad, levantamiento de la ficha predial rural y su respectivo anexo de beneficiarios, verificación de la Función Social (FS) y/o Función Económica Social (FES), registro de los datos de campo en el Sistema de Mantenimiento y Administración de la Tierra (SIMAT), y conformación de la base de datos geográfica del catastro.
 - c. Etapas de Resolución, Titulación y Registro. En esta etapa se apoyarán las actividades relacionadas con la elaboración de los proyectos de resoluciones para cada tipo de proceso de titulación (Resolución Suprema, Resolución Administrativa, Resolución para Posesiones y Remisión de Antecedentes), la firma de resoluciones, la emisión de los títulos de propiedad, registro del título en DDDR y la entrega del título de propiedad a los productores y comunidades.
- 1.2 **Componente 2: Administración de Tierras.** Este componente financiará la modernización de las plataformas tecnológicas de catastro rural del INRA y la de registro de tierras rurales del DDDR para facilitar la administración de los procesos de catastro, titulación y registro de tierras rurales. Para la modernización del sistema catastral, el componente financiará: la unificación y consolidación del Sistema de

Mantenimiento y Administración de la Tierra (SIMAT) y Sistema Integrado de Catastro (SIC) como herramientas técnicas para la administración de tierras; desarrollo e implementación del nodo INRA - GeoBolivia; diseño e implementación de la plataforma de servicios INRA; y digitalización e indexación del fondo documental del INRA. Para la modernización del sistema de registro de los DRRR, el componente comprende: desarrollo de la plataforma de servicios de DRRR; fortalecimiento de las oficinas de DRRR; y campañas de mantenimiento catastral. Además, el componente 2 financiará la adquisición, construcción y restauración de 10 oficinas centrales y centros de Operaciones, tanto a nivel Nacional como a nivel Regional del INRA.

1.3 Componente 3: Fortalecimiento institucional para la gestión ambiental y social.

Este componente está diseñado para cumplir tanto con las políticas de gestión ambiental y social del Estado Plurinacional Boliviano como con las políticas de salvaguardias ambientales y sociales del Banco. Este componente financiará el fortalecimiento de los instrumentos existentes de gestión ambiental y social de la tierra. Para el fortalecimiento de los instrumentos de gestión ambiental, se financiará las siguientes actividades: un estudio para mejorar los instrumentos de verificación de la Función Económica Social (FES), un estudio para definir el marco conceptual, la viabilidad de implementación y una propuesta operacional del Catastro Ambiental Rural, que incluye la preparación de planes de uso de suelo en áreas de producción agropecuaria, un estudio de escenarios de la ampliación de la frontera agropecuaria; y el desarrollo de una propuesta de fortalecimiento del sistema nacional de monitoreo de la cobertura vegetal.

1.4 Para el fortalecimiento de los instrumentos de gestión social, se financiará las siguientes actividades: la reactivación de los Comités Interinstitucionales para la titulación de las TIOC; la elaboración de acuerdos para la titulación participativa; la elaboración de planes de gestión territorial indígena; la elaboración de una propuesta de actualización de clasificación de la pequeña propiedad; la elaboración de estudios estratégicos sobre el minifundio y los territorios indígenas, la capacitación del personal del INRA en resolución intercultural de conflictos; la formación de brigadas especializadas en resolución de conflictos; el fortalecimiento de las capacidades del Tribunal Agroambiental para la resolución de conflictos; el fortalecimiento de los enfoques intercultural y de género del INRA; el fortalecimiento de la unidad de comunicación y género del INRA, el diseño e implementación de una estrategia de comunicación con enfoque de género e interculturalidad, el desarrollo de protocolos y mecanismos para la recepción y resolución de quejas y el fortalecimiento de la unidad de transparencia del INRA.

III. MARCO INSTITUCIONAL Y REGULATORIO

Marco y Capacidad Institucional

3.1 El **INRA** fue creado en 1996 como la entidad pública descentralizada encargada de planificar, ejecutar y consolidar el proceso de reforma agraria (véase sección I para mayores detalles sobre su rol y trayectoria institucional). El INRA cuenta actualmente con una Unidad de Resolución de Conflicto y una Unidad de Género y Comunicación. Durante la Evaluación Ambiental y Social Estratégica del Programa, se realizó un diagnóstico de la capacidad institucional del INRA para la gestión de los aspectos sociales y ambientales del Programa, así como para garantizar el cumplimiento de las políticas de salvaguarda del Banco. Se evidenció que el personal de la Unidad de Género y Comunicación se dedica únicamente a temas de comunicación, quedando el

tema de género en segundo plano. Además, las herramientas actuales del INRA para la resolución de conflictos no son suficientes para dar adecuada resolución a los múltiples conflictos de tierra existiendo en la actualidad, quedando paralizada una porción significativa de tierras en saneamiento. Quedó también evidente que el INRA no cuenta con otro tipo de especialista en materia social y ambiental que pueda dar liderazgo a la implementación de las medidas de gestión ambiental y social del Programa. Finalmente, se estableció la necesidad de fortalecer la Unidad de Transparencia del INRA para gestionar adecuadamente quejas y reclamos relacionados al Programa.

- 3.2 **La Autoridad de Fiscalización y Control Social Bosques y Tierra (ABT)** controla, supervisa y regula los sectores Forestal y Agrario, controlando las actividades humanas, promoviendo el desarrollo y manejo integral sustentable en beneficio del pueblo boliviano. Fue creado bajo el Decreto 71 (2009) con la fusión de la Superintendencia Forestal y la Superintendencia Agraria y es parte del Ministerio de Desarrollo rural y tierras. Así tiene mandato de trabajar en el sector agrícola y forestal. Es responsable para concesiones forestales, la aprobación y monitoreo de Planes Generales de Manejo Forestal, el monitoreo de la tala comercial y el control de la tala ilegal. Es responsable para el monitoreo del uso de la tierra. Su unidad de monitoreo geoespacial es la institución nacional responsable para el monitoreo de deforestación y también es responsable para el manejo de trabajo asociado con REDD⁺ (Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sostenible de los Bosques de la Madre Tierra; MCMA). También hace evaluación de las tierras bajo el concepto de Función Económica y Social (FES), incluyendo su reasignación de la tierra cuando es necesario. La Evaluación Ambiental y Social Estratégica del Programa evidenció que en la actualidad la ABT no cuenta con recursos suficientes para cumplir su rol de forma óptima.
- 3.3 **El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA)** es una institución pública encargada de la conservación y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales en Bolivia. Está dividida en tres viceministerios: de Saneamiento Básico y Agua Potable, de Recursos Hídricos y Riego, y de Medio Ambiente. Se encarga de desarrollar y ejecutar políticas públicas, normas, planes, programas y proyectos para la conservación, adaptación y aprovechamiento sustentable de los recursos ambientales, así como el desarrollo de riego y saneamiento básico con enfoque integral de cuencas, preservando el medio ambiente, que permita garantizar el uso prioritario del agua para la vida. Es la entidad normativa por el régimen de forestal boliviano y la estrategia nacional de bosques.
- 3.4 **El Vice-Ministerio de Tierras del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras** es responsable de formular políticas, normas y estrategias sobre gestión de la tierra con base a criterios de equidad de oportunidades, integradas a planes productivos y velando por la sostenibilidad del recurso natural y la seguridad jurídica en el derecho propietario. También es responsable de la gestión territorial indígena y el desarrollo económico productivo de los pueblos indígenas y originarios, a través la Unidad de Gestión Territorial Indígena. La Evaluación Ambiental y Social Estratégica del Programa evidenció que en la actualidad esta unidad no tiene incidencia activa en estos temas por falta de recursos financieros.

Marco regulatorio

- 3.5 **Ley INRA** (Ley 1715, de 1996). Establece el marco normativo nacional para la adjudicación y el reconocimiento de derechos sobre la propiedad de la tierra, a través el saneamiento y la titulación de tierras rurales. Incluye como principio rector que la tierra

pertenece a quien la trabaja. Crea al Instituto Nacional de Reforma Agraria como entidad especializada en administración de tierras, y define sus mandatos. La Ley incluye reformas a la organización territorial en Bolivia y reconoce a las Tierras Comunitarias de Origen como propiedades de pueblos indígenas. Adicionalmente establece: (i) el respeto a la capacidad de uso mayor de las tierras para asegurar su uso sostenible; ii) el saneamiento de la propiedad agraria como procedimiento para reconocer y definir derechos propietarios; iii) la reversión en caso de abandono de propiedad agraria; v) la indivisibilidad de la pequeña propiedad; y vi) la expropiación de tierras de medianos propietarios y empresas por incumplimiento de la Función Económica Social.

- 3.6 **Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria** (Ley 3545 de 2006). Esta ley modifica la Ley 1715 (Ley INRA) agilizando la titulación de tierras colectivas y establece que todas las tierras fiscales disponibles (incluyendo bosques) deberán dotarse preferencialmente a favor de pueblos y comunidades indígenas o campesinas con escasez de tierra. También establece la reversión al Estado de tierras de medianos propietarios y empresas por incumplimiento de su función económica-social (véase sección 3.8).
- 3.7 **Función económica y social.** La Ley INRA clasifica las propiedades según la función que debieran cumplir, asignando al Solar Campesino, a la Pequeña Propiedad (menos de 50 hectáreas en tierras bajas y menos de 5 hectáreas en las tierras altas), a la Propiedad Comunitaria y a los Territorios Indígena Originario Campesinos, una función social, en tanto sus tierras están orientadas principalmente a la satisfacción de las necesidades de la población y la re-producción cultural. A la Mediana Propiedad y a la Empresa Agrícola, en cambio, les asigna una función económico-social en tanto producen para el mercado agropecuario o desarrollan actividades productivas asociadas a la investigación, ecoturismo y protección a la biodiversidad. El control del cumplimiento de esta función económica-social se da durante los procesos de titulación, así como posteriormente en intervalos de dos años. Tierras o partes de ellas que no cumplen con tal función pueden ser revertidas al estado como tierras fiscales.
- 3.8 **Ley 1700 Forestal** (1996). Esta ley norma la utilización sostenible y la protección de los bosques y tierras forestales en beneficio de las generaciones actuales y futuras, armonizando el interés social, económico y ecológico del país. Define nuevas regulaciones para el uso forestal e instrumentos para la gestión sostenible de bosques, incluyendo Planes de Manejo de Bosque que deben cumplir con algunos requerimientos.
- 3.9 **Ley 71 de Derechos de la Madre Tierra** (2010) y **Ley 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien** (2012). Estas leyes reconocen los derechos de la Madre Tierra, así como las obligaciones y deberes del Estado Plurinacional y de la sociedad para garantizar el respeto de estos derechos. Establecen las bases sectoriales, instrumentos técnicos y garantías para que estos derechos sean respetados. Esto incluye la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, así como un mecanismo financiero para la implementación de la agenda climática y ambiental en Bolivia. Además se prohíbe mercantilizar los sistemas de vida y los procesos que los sustentan. Se establece
- 3.10 **Ley 144 de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria** (2011). Esta ley tiene por objeto normar el proceso de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria para la soberanía alimentaria estableciendo las bases institucionales,

políticas y mecanismos técnicos, tecnológicos y financieros de la producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios y forestales.

- 3.11 **Ley 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques** (2013). Esta ley fue promulgada con la finalidad de regularizar los desmontes ilegales mediante la exención de multas para desmontes cometidos entre el 1996 hasta fines del 2011 mediante la adscripción a un programa de producción de alimentos, y la restitución de 10% de la cobertura forestal en terrenos mayores de 50ha, entre otros. Es generalmente percibida como instrumento para facilitar la ampliación de la frontera agrícola, aunque incluye compromisos de reforestar y restituir reservas ecológicas.
- 3.12 **Género.** La ley 3545, de 2006 (véase sección 3.6) incluye garantías para la participación de la mujer en los procesos de saneamiento y distribución de tierras. En el caso de matrimonios y uniones conyugales, los títulos ejecutoriales se emiten a favor de ambos cónyuges o convivientes que se encuentren trabajando la tierra, consignando el nombre de la mujer en primer lugar.

Cumplimiento con las políticas de salvaguarda del Banco y la normativa nacional

- 3.13 **Cumplimiento con políticas de salvaguarda del Banco.** El Programa activa las siguientes directrices y políticas del Banco: OP-102; OP-703 (Directivas B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.9 y B.17); OP-704; OP-761; OP-765. En relación a la política OP-704, se estima que el riesgo de desastre relacionado a esta operación es nulo. Se ha activado la política de género OP-761 para asegurar una distribución equitativa entre hombres y mujeres al otorgar títulos de propiedad individuales, y para explorar las oportunidades de fortalecer el acceso de las mujeres en procesos de titulación. Se ha activado la política indígena OP-765 tanto porque el proyecto ofrece importantes beneficios a poblaciones indígenas, originarias y campesinas para conseguir la seguridad jurídica sobre sus tierras y territorios, y por la potencial presión sobre sus tierras como resultando de la expansión de la frontera agrícola. Durante el análisis ambiental y social del proyecto se ha evaluado que no aplica la política de reasentamiento OP-710, dado que no existen precedentes de reasentamiento involuntario como parte de procesos de titulación de tierras en Bolivia.
- 3.14 El análisis del Programa a través los filtros de salvaguardias ambientales y sociales ha generado la categoría ambiental A, en particular porque existe el riesgo de que los productores rurales titulados por el Programa conviertan de forma significativa áreas con alto valor en términos de biodiversidad y servicios de ecosistema (Tierra de Protección Forestal de acuerdo con la legislación forestal Boliviana) hacia usos agropecuarios, si no se toman medidas adecuadas de protección de los recursos. Sin embargo, sobre la base de la información disponible, el equipo de salvaguarda del proyecto y el jefe de proyecto acordaron reclasificar al Programa en la Categoría B. La adecuación de esta clasificación ha sido confirmada durante el Análisis Ambiental y Social del Programa, por las siguientes razones. Primero, la deforestación potencial no representaría un impacto directo de la titulación de las propiedades rurales, sino que sería un impacto asociado a las políticas agrarias actualmente contempladas por el gobierno boliviano, la baja capacidad de monitoreo y fiscalización de la ley forestal/ambiental, y dinámicas agropecuarias. Con la adopción de nuevos enfoques ambientales y de prevención a la deforestación como parte del Plan de Desarrollo Económico y Social del Gobierno de Bolivia, la probabilidad de que esto se materialice se redujo de forma significativa. Segundo, este Programa contribuirá a limitar la deforestación al fortalecer el marco normativo/institucional vigente en área ambiental y de uso del suelo, así como los mecanismos para su implementación y control. Como

parte de una Evaluación Ambiental Estratégica del cambio de uso de suelo realizada como parte del Análisis Ambiental y Social del Programa, se evidenció que los niveles de deforestación serán menores con la ejecución de las medidas gestión ambiental propuestas por el Programa que sin ellas.

- 3.15 Durante la preparación del Programa se ha realizado una Evaluación Ambiental y Social Estratégica (EASE). Como parte de la EASE, se han realizado, entre otras actividades, una extensa revisión bibliográfica; visitas a campo en los departamentos de La Paz y Santa Cruz; acompañamiento a los trabajos de saneamientos en campo de las brigadas de titulación del INRA; extensivas entrevistas y grupos focales con beneficiarios, organizaciones sociales, autoridades públicas, ONGs y otros actores clave de la titulación de tierras; y talleres de identificación de temas clave y de validación de los resultados de la EASE con el personal del INRA.
- 3.16 La EASE ha incluido un análisis de escenarios de deforestación hacia el año 2025 relacionados a la titulación de tierras, comparando a) el escenario de continuación de la situación actual; b) el escenario de deforestación con aplicación adecuada de la normativa vigente, a través el fortalecimiento de los instrumentos de gestión ambiental propuestos por el Programa; y c) el escenario de deforestación resultante de medidas de estímulo al incremento de la productividad agropecuaria implementadas por el Gobierno de Bolivia entre 2013 y 2015.
- 3.17 Además de impactos positivos muy significativos, la EASE ha identificado una serie de riesgos e impactos potenciales negativos relacionados con el Programa, incluyendo impactos diferenciados sobre poblaciones indígenas. Se ha elaborado un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) con medidas destinadas a mitigar estos riesgos e impactos. El PGAS, además, incluye medidas estratégicas para contribuir a la gestión sustentable de la tierra, así como a la inclusión de enfoques de género e interculturalidad de forma transversal en el proceso de titulación. Las medidas del PGAS han sido incorporadas en su integralidad en el diseño del Programa a través el componente 3. De esta forma, se ha dado cumplimiento a los requerimientos aplicables de las políticas de salvaguarda del Banco, en particular de la Política de Medio Ambiente (OP-703), la Política de Género (OP-761) y la Política de Pueblos Indígenas (OP-765). Como parte de la EASE se ha determinado que la Política de Reasentamiento Involuntario (OP-765) no aplica al Programa.
- 3.18 La tabla No. 1 presenta, a la fecha de elaboración de este IGAS, el estado de cumplimiento del Proyecto con las políticas ambientales y sociales del Banco que han sido activadas.

POLÍTICA		ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO
OP-102	Disponibilidad de Información	Cumplida parcialmente	<ul style="list-style-type: none"> La información relacionada con el Proyecto ha sido presentada a las principales organizaciones sociales representativas de los beneficiarios del Programa durante reuniones de consulta pública. Una vez aprobadas las versiones finales de la EASE y el PGAS, serán puestos a disposición del público en los sitios web del INRA y del Banco. 	<ul style="list-style-type: none"> Antes de la presentación del Programa al Directorio del Banco.
OP-703	Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias			
B.1	Políticas del Banco	Cumplida.	Se verificará el cumplimiento lo largo de la vida del Programa	
B.2	Legislación y Regulaciones Nacionales	Cumplida.	<ul style="list-style-type: none"> Los procesos de titulación de tierras no requieren de análisis o licenciamiento ambiental por la normativa nacional. 	

POLÍTICA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO
		<ul style="list-style-type: none"> El Programa cumple con las disposiciones de la Ley INRA y la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. 	
B.3 Preevaluación y Clasificación	Cumplida.	El Programa ha sido clasificado en la categoría B.	
B.4 Otros Factores de Riesgo	Cumplida	<ul style="list-style-type: none"> Se han identificado las brechas en capacidad institucional del INRA para la gestión social y ambiental del Programa e incluido medidas de fortalecimiento institucional en el PGAS. 	
B.5 Requisitos de Evaluación Ambiental	Cumplida.	<ul style="list-style-type: none"> Se ha realizado una Evaluación Ambiental y Social Estratégica. Se ha desarrollado un Plan de Gestión Ambiental y Social, cuyas medidas han sido incorporadas en su integralidad en el componente 3 del Programa. 	
B.6 Consultas	Cumplida	<ul style="list-style-type: none"> Como parte de la EASE se han realizado reuniones con representantes de las principales organizaciones sociales representativas de los beneficiarios de la titulación de tierras. Se ha presentado el diseño preliminar del Programa durante la reunión anual del INRA de rendición de cuentas a la sociedad civil, logrando su conformidad con el Programa bajo acta. Se han realizado tres reuniones de consulta con las principales organizaciones sociales de beneficiarios indígenas, campesinos, interculturales y empresariales, logrando su conformidad con el diseño final del Programa bajos actas firmadas. 	
B.7 Supervisión y Cumplimiento	Cumplida	<ul style="list-style-type: none"> El Programa cuenta con un Plan de Monitoreo. El Programa apoyará al monitoreo de la deforestación en Bolivia. 	
B.9 Hábitats y Sitios Culturales	Cumplida.	<ul style="list-style-type: none"> El Programa incluye medidas que redireccionarán la deforestación como parte de la expansión de la frontera agrícola hacia áreas permitidas, evitando la deforestación de hábitats críticos. El PGAS cuenta con un protocolo para los casos donde se encuentra patrimonio cultural durante las labores de saneamiento de la tierra en campo. 	
B.17 Adquisiciones	Cumplida.	<ul style="list-style-type: none"> Se aplicarán las provisiones del caso para que los bienes y servicios adquiridos en las operaciones se produzcan de manera ambiental y socialmente sostenible. 	
OP-704 Gestión del Riesgo de Desastres	Cumplida.	<ul style="list-style-type: none"> Se estima que el riesgo de desastre relacionado con el proceso de saneamiento y titulación de tierras es nulo. 	
OP-710 Reasentamiento Involuntario	No aplica	<ul style="list-style-type: none"> La EASE ha confirmado que no existen antecedentes de procesos de reasentamiento involuntario relacionados a los procesos de titulación de tierras en Bolivia. No se prevé acciones dentro del Programa que requieran de reasentamiento involuntario. El PGAS incluye la obligación de aplicar la política OP-710 en el caso de reasentamientos imprevistos. 	
OP-761 Igualdad de Género en el Desarrollo	Cumplida parcialmente	<ul style="list-style-type: none"> Los títulos de tierras serán emitidos a nombre de ambos conyugues, con el nombre de la mujer primero. Se fortalecerá la Unidad de Género del INRA. Se incorporará el enfoque de género de forma 	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecimiento de la Unidad de Género en el primer año del Programa Transversalización del enfoque de género a lo largo de la vida del

POLÍTICA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO
		transversal en el trabajo del INRA y en el proceso de titulación tierras.	Programa
OP-765 Pueblos Indígenas	Cumplida	<ul style="list-style-type: none"> La EASE incluyó un análisis de impactos diferenciados sobre poblaciones indígenas. El PGAS contiene medidas específicas direccionadas a poblaciones indígenas, en particular relacionadas a la titulación participativa y la gestión territorial indígena. Las principales organizaciones indígenas, campesinas e interculturales de Bolivia han sido consultadas y han expresado su consentimiento firmado con el Programa. Se han incluido en el diseño del Programa mecanismos participativos para la titulación de las tierras de poblaciones indígenas, campesinas e interculturales. 	

Tabla No. 1: Estado de cumplimiento de las políticas ambientales y sociales del Banco activadas por el Programa.

- 3.19 **Licenciamiento ambiental.** Durante la realización de la EASE, se confirmó que la normativa nacional no requiere la obtención de una licencia ambiental para la ejecución de este proyecto. Los procesos de titulación de tierras en Bolivia no requieren de licencias ambientales. De la misma forma, no se requiere elaborar evaluaciones ambientales y sociales, así como planes de manejo de ambiental y social. La EASE y el PGAS elaborados durante la preparación del Programa en cumplimiento con las políticas de salvaguarda del Banco son los instrumentos ambientales y sociales bajos los cuales se regirá el Programa.
- 3.20 **Consulta pública y participación ciudadana.** El marco regulatorio de Bolivia no exige la realización de consultas públicas como parte de los procesos de titulación de tierra. En la práctica, la titulación en determinadas comunidades y parcelas se realiza en respuesta a la demanda de los beneficiarios. El INRA sostiene espacios de dialogo y reuniones frecuentes con las organizaciones que representan a los beneficiarios e interesados en la titulación. Las organizaciones principales incluyen a las siguientes: organizaciones indígenas, como el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB); organizaciones campesinas, como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); y los gremios de grandes y medianos productores, como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). Además, las políticas y los procesos de titulación se discuten y revisan anualmente durante reuniones de la Comisión Agraria Nacional, que aglutina actores del estado y de la sociedad civil. Asimismo, representantes locales y regionales de estas organizaciones participan frecuentemente como observadores en los procesos de titulación y la verificación del cumplimiento de la Función Económica y Social en las tierras de medianos propietarios y empresas, una función otorgada legalmente a través de la Ley de Participación y Control Social (ley 341 del 2013).
- 3.21 Durante la preparación del Programa se ha desarrollado un proceso extensivo de consulta y participación ciudadana. En el marco de la Evaluación Ambiental y Social Estratégica del Programa, se han realizado una serie de reuniones y entrevistas con organizaciones representativas de los beneficiarios de la titulación a nivel nacional, departamental y local. Los resultados de este proceso han informado de forma significativa el diseño del proyecto. Entre las principales medidas del Programa que resultan de propuestas y preocupaciones levantadas durante este proceso de

- involucramiento se incluyen: las medidas para fortalecer la participación de las organizaciones campesinas e indígenas en los procesos de titulación; el apoyo a la gestión territorial indígenas; los mecanismos de resolución de conflicto; las propuestas para el fortalecimiento del control a la deforestación; y la inclusión de forma transversal de enfoques de género e interculturalidad en el trabajo del INRA.
- 3.22 En el mes de enero 2016, el INRA ha presentado una propuesta preliminar del Programa durante su reunión anual de rendición de cuentas con la sociedad civil. Se ha firmado un acta en la que los participantes declaran su conformidad con el Programa.
- 3.23 El proceso de consulta culminó con la realización de tres reuniones para la presentación del diseño del Programa, incluyendo sus medidas de gestión ambiental y social, a las principales organizaciones nacionales representativas de los beneficiarios de la titulación de tierras. Entre el 17 y 18 de mayo 2016 se realizaron reuniones con respectivamente las principales organizaciones campesinas e indígenas de tierras altas, así como de las comunidades interculturales (5 organizaciones); las principales organizaciones de indígenas de tierras bajas (10 organizaciones); y las principales organizaciones gremiales de productores agropecuarios (5 organizaciones). Durante estas reuniones se les presentó el diseño del Programa, las metas de titulación para los respectivos sectores, y las medidas de gestión social y ambiental, incluyendo las medidas de mitigación de impactos negativos. Estas reuniones culminaron en la firma de actas de conformidad con el Programa por parte de los participantes. En los anexos 1 a 3 de este documento se encuentran las actas respectivas, donde también se puede encontrar listado de presencia de los individuos y de las organizaciones participantes. Con estas actividades y sus resultados se cumple con y supera a los requisitos para consulta tanto de la Política de Medio Ambiente (OP-703) cuanto la Política sobre Pueblos Indígenas (OP-765).
- 3.24 Así mismo, durante la implementación del Programa, se aplicarán varias medidas para fomentar la participación ciudadana. El INRA continuará con la práctica actual de realizar reuniones periódicas con las organizaciones representativas de los beneficiarios de la titulación para coordinar y consensuar el trabajo de titulación, y reportará los resultados de estas reuniones en sus informes semestrales al Banco. De la misma forma, continuará a involucrar a las organizaciones sociales en el proceso de saneamiento en campo a través el mecanismo de control social. Finalmente, la titulación del remanente de la demanda de las TIOC se ejecutará de forma participativa con las autoridades de las TIOC a través la reactivación de los Comités Interinstitucionales TCO.

IV. CONTEXTO AMBIENTAL Y SOCIAL

- 4.1 **Geografía.** Bolivia está dividida en cuatro macro-regiones geográficas. La región Andina en el occidente del país abarca el 28% del territorio. Consiste principalmente en montañas y la meseta del Altiplano que se extiende entre los dos ramales de la Cordillera de los Andes, con una altura promedio de 3800msnm. El clima es frío y seco, y las tierras son mayormente áridas. La región de los Valles (13% del territorio) forma la transición entre los Andes y las tierras bajas. Contiene vegetación exuberante y tierras fértiles para la agricultura. La región de la Amazonia es uno de los mayores ecosistemas de bosques continuos del mundo (59% del territorio), abarca la parte oriental y el norte de Bolivia, con tierras mayormente planas y con cobertura de selva, aunque existen también importantes extensiones de sabanas (principalmente en departamento de Beni) y de tierras áridas (en la región del Chaco).

- 4.2 **Población boliviana.** La población boliviana contiene una gran diversidad étnica y cultural. Según el censo del 2001, el 62% se consideraba indígena. Existen 36 grupos étnicos que son oficialmente reconocidos por el Estado, así como 37 idiomas oficiales. La gran mayoría de la población indígena se concentra en la región andina y de los valles, siendo los Aymaras y Quechuas los más numerosos. En el área rural estos son también frecuentemente considerados como campesinos. Están mayormente organizados en comunidades y ayllus. En las tierras bajas el grupo más grande son los Guaranís, mientras que en la región Amazónica existe una gran variedad de pueblos indígenas relativamente pequeños. Según criterios de la política operacional sobre pueblos indígenas (OP-765), tanto los grupos Aymaras y Quechuas de tierras altas cuanto los demás pueblos se considerarán como indígenas en el marco de este Programa. Los grupos indígenas y campesinos de Bolivia tienen una fuerte organización colectiva a nivel regional y nacional, a través de organizaciones como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB).
- 4.3 Existe también una importante población mestiza, generalmente el resultado de la mezcla entre descendientes de colonizadores europeos e indígenas. Esta población está repartida por todas las regiones del país, pero se concentra sobre todo en las ciudades de mediano y gran tamaño. Existe también una minoría de Afrobolivianos en el departamento de La Paz, así como de blancos o criollos, concentrados mayormente en las grandes ciudades. Debido a la migración de tierras altas hacia la región Amazónica, a partir de los años 1960, existe también en esta región una importante presencia de agricultores de origen Aymara y Quechua, denominados en general colonos – o interculturales, según su auto-definición.
- 4.4 **Tenencia de la tierra.** Debido a la gran diversidad poblacional y geográfica de Bolivia, los patrones de tenencia y uso de la tierra igualmente evidencian una gran variedad y altos niveles de complejidad. Existe una mezcla compleja de propiedad individual y colectiva. En las áreas rurales de la región Andina, así como en la mayor parte de la región de los Valles, la tierra es mayormente de propiedad colectiva de la comunidad o del ayllu, con derechos de usufructo sobre parcelas agrícolas otorgados a familias que son miembros del colectivo. Estas parcelas generalmente se transmiten por herencia, y en el caso de las comunidades se otorgan títulos formales sobre ellas. Existen también áreas de propiedad y uso colectivo para el pastoreo de ganado. Sobre todo en el Altiplano, la tenencia de la tierra se caracteriza por el microfundio. Una familia típica puede ser dueña de unas 6-10 parcelas, repartidas en varias partes de la comunidad, con un área total que muchas veces no supera las 3 hectáreas. Hay una gran escasez de tierras, lo que genera migración hacia las ciudades y las tierras bajas.
- 4.5 Los Territorios Indígena Originario Campesino (TIOC) son otra forma de organización territorial de los pueblos indígenas. Estos territorios de propiedad y usos colectivos han sido formalmente reconocidos a partir de los años 1990. Se encuentran en todas las regiones del país, y son la forma principal de organización territorial de los pueblos indígenas de las tierras bajas, donde en la actualidad existen 57 TIOC reconocidos con un total de más de 13 millones de hectáreas tituladas.
- 4.6 En las tierras bajas existen también grandes extensiones de medianas y grandes propiedades con producción agropecuaria en propiedad de elites regionales, sobre todo en los departamentos de Santa Cruz y del Beni. En estas propiedades la producción está centrada mayormente en la soya, el arroz, el azúcar y la ganadería bovina. En estas áreas hay un avance gradual de la frontera agrícola, con la constante

incorporación de nuevas tierras a la producción. Estos grupos están organizados en diferentes gremios, aglutinados en la Cámara Agropecuaria del Oriente. Finalmente, en las tierras bajas se encuentran también las comunidades de los denominados interculturales, migrantes de los Andes y sus descendientes, que practican la agricultura y la ganadería a pequeña escala, y son propietarios de parcelas individuales.

- 4.7 **Saneamiento interno.** La alta fragmentación de la tenencia de la tierra en la región del Altiplano ha resultado en un complejo mosaico, donde familias e individuos son dueños de una variedad de micro parcelas, a menudo distribuidas entre diferentes comunidades y pisos ecológicos. Frente a este escenario se ha desarrollado la modalidad del saneamiento interno, donde las comunidades definen los linderos entre las diferentes parcelas individuales al interior de la comunidad. Una vez terminado este proceso, que según información recolectada durante la misión de identificación puede tomar hasta cuatro años, el INRA inicia el proceso formal de titulación de estas parcelas.
- 4.8 **Redistribución de tierras.** El INRA tiene la facultad de revertir al estado tierras que no cumplen con una función económica y social. Estas se vuelven tierras fiscales. Aquellas tierras fiscales cuyo suelo tiene vocación agropecuaria pueden ser adjudicadas a favor de poblaciones con escasez de tierras, a través de la creación de nuevas comunidades. Las tierras dotadas son de propiedad colectiva de la comunidad. En la práctica, los beneficiarios suelen ser principalmente campesinos de la región andina, mientras las tierras dotadas se encuentran mayormente en las tierras bajas. La dotación de tierras ha sido el principal mecanismo para la redistribución de tierra a favor de indígenas, campesinos y otros pequeños productores, una reivindicación histórica de estos sectores sociales.
- 4.9 **Género.** Históricamente, el acceso a la tierra en Bolivia ha evidenciado un sesgo a favor de los varones y en detrimento de las mujeres. A partir de la revisión de la Ley INRA en el 2006, este desequilibrio se ha reducido con la priorización de las mujeres en la titulación de parcelas individuales, donde ahora figuran como primer beneficiario en los títulos. Desde 2006, las mujeres constituyen el 46% de los beneficiarios de la titulación de parcelas individuales. Sin embargo, el derecho legal sobre la tierra no está siempre asociado con un control real sobre la tierra, o de una capacidad igualitaria de beneficiarse económicamente de la tenencia de la tierra. Además, continúa el desequilibrio en el contexto de tierras colectivas, donde el acceso a la tierra es regulado por normas y prácticas consuetudinarias, y los derechos a la tierra se suelen otorgar a nivel de familia.

V. IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES & MEDIDAS DE MITIGACIÓN

- 5.1 La EASE ha identificado una serie de impactos ambientales y sociales positivos muy significativos del Programa. De otro lado, ha puesto en evidencia riesgos e impactos potenciales sociales y ambientales negativos relacionados con el saneamiento y la titulación de la tierra, incluyendo impactos diferenciados sobre poblaciones indígenas. También ha identificado problemas estructurales en la tenencia y el uso de la tierra sobre los cuales el proceso de titulación de la tierra tiene impactos neutros, pero para los cuales el Programa contribuirá a proponer soluciones. Esta sección analiza los impactos, riesgos y problemas estructurales más significativos, así como las medidas diseñadas para evitar, mitigar y compensarlos. Dado el estado avanzado del proceso de saneamiento en Bolivia, a la hora de la aprobación del Programa la etapa de saneamiento en campo se encontrará en sus fases finales. De esta forma, el potencial

del Programa de incidir sobre este proceso es relativamente limitado. Por esta razón, el Programa se enfocará sobre todo en medidas de gestión ambiental y social de carácter estratégico a mediano y largo plazo.

Impactos ambientales negativos directos

- 5.2 **Deforestación preventiva por el sesgo agrario en la verificación del cumplimiento de la Función Económica y Social (FES).** La normativa sobre el cumplimiento con la FES incluye explícitamente los usos de la tierra que contribuyen a la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, en la práctica, las brigadas del INRA responsables de sanear las tierras de medianos propietarios y empresas demuestran una marcada tendencia de evaluar el cumplimiento de la FES de la propiedad con una visión agrarista, privilegiando, en cierta manera, los usos agrícolas y ganaderos sobre los demás usos sostenibles que se puedan realizar sobre la tierra, como son la preservación ambiental, el turismo, la apicultura, fruticultura, entre otros. Este enfoque acentúa la deforestación dado que los propietarios deforestan sus tierras anticipando que las mismas se revertirán si mantienen su cobertura boscosa por no cumplir una función económica y social, acción que viene aparejada con los problemas ambientales asociados: pérdida de biodiversidad, degradación y desertificación del suelo, degradación de cuencas hídricas, afectación a fuentes naturales de agua, cambio climático, incremento de procesos erosivos, pérdida de funciones ambientales, entre otros. Esta tendencia ha sido particularmente acentuada durante los periodos de conflicto entre el Gobierno de Bolivia y los sectores empresariales del Departamento de Santa Cruz entre 2006 y 2010, y ha ido disminuyendo significativamente a partir de este periodo.
- 5.3 Para evitar y mitigar este impacto, como parte del Programa se desarrollará una **propuesta de actualización de los instrumentos de verificación de la FES.** Las modificaciones, actualizaciones y adecuaciones que se deben realizar a la Función Económica Social están orientadas a que se cumpla la normativa nacional que conduce a asegurar el uso sustentable de la tierra. Entre otros, se crearán los instrumentos para la **verificación adecuada de los otros usos – no agropecuarios – en la FES, y la incorporación de criterios ambientales.** También se **capacitará al personal del INRA** en la identificación de los otros usos y la aplicación de criterios ambientales en la verificación de la FES. Se difundirá a través de **campañas mediáticas** el nuevo enfoque en la verificación de la FES entre los propietarios de la tierra para evitar la deforestación preventiva. También se elaborará una propuesta de revisión y **agilización de los trámites para autorizaciones para los otros usos de la FES,** enfocada en particular en la aprobación de Reservas Privadas de Patrimonio Natural y actividades ecoturísticas. Finalmente, se desarrollará una propuesta de **actualización de la FES en lo referido a la carga animal,** para adecuar la carga animal referencial a las condiciones ambientales en los diferentes pisos ecológicos y ecosistémicos del país, y así asegurar un uso más sostenible de la tierra.
- 5.4 **Deforestación relacionada a la titulación de la tierra.** Durante el análisis de diferentes escenarios de deforestación, como parte de la EASE, se ha comparado mapas de deforestación de 2010 y 2013 del Departamento de Santa Cruz con áreas tituladas durante este periodo. Este análisis ha evidenciado un aumento de la deforestación asociado al proceso de saneamiento y titulación de la tierra, en particular en tierras de empresas (75 hectáreas por parcela de promedio) y medianos propietarios (15 ha/parcela).
- 5.5 Para mitigar este impacto el Programa propondrá el desarrollo de un **Catastro Ambiental Rural,** modelado en las experiencias del catastro ambiental implementado en Brasil, y adecuado a la realidad boliviana. El Catastro Ambiental Rural pretende

incorporar información de carácter ambiental en el registro de los datos catastrales de las propiedades medianas y empresas, con el objetivo de garantizar la preservación de la cobertura forestal y de áreas ambientales estratégicas, y de contribuir a una gestión más sostenible del suelo. Como parte del Programa se financiará un estudio para la definición del marco conceptual y de la viabilidad ambiental, social y política del Catastro Ambiental Rural; así como el desarrollo de una propuesta operativa para el Sistema Nacional de Catastro Ambiental Rural.

- 5.6 Como parte del Programa, también se apoyará a la ABT para **fortalecer el sistema nacional de monitoreo de cobertura vegetal**. Se desarrollará un sistema de monitoreo y fiscalización en tiempo real, con la integración de la base de datos de las diferentes instituciones estatales relevantes para la gestión ambiental y de la tierra, el uso de imágenes satelitales quincenales y el registro de los datos de teléfono celular de los propietarios medianos y de empresas agropecuarias para realizar intervenciones directas en el caso de deforestación detectada.

Impactos ambientales negativos indirectos

- 5.7 **Deforestación en áreas municipales y departamentales de conservación.** Durante la definición de disponibilidad de tierras fiscales, en particular para la dotación de tierras, el INRA identifica si estas tierras se ubican dentro de los límites de Áreas Protegidas nacionales. Sin embargo, no identifica si estas tierras se encuentran dentro de áreas de conservación municipales o departamentales. Por esta razón, en la práctica ha ocurrido la dotación de tierras para la creación de nuevos asentamientos en este tipo de áreas de conservación, con la deforestación resultante. Para evitar y mitigar este impacto, como parte del PGAS se establece que antes de la declaración de tierras fiscales como disponibles, se debe **coordinar con autoridades municipales y departamentales** para asegurarse que estas tierras no se ubican dentro de áreas de conservación municipales o departamentales, en cuyos casos se mantendrán como tierras fiscales no disponibles.
- 5.8 **Degradación de áreas que cumplen funciones ecológicas estratégicas.** No se cuenta en la actualidad en Bolivia con una definición adecuada de funciones ecológicas estratégicas diferenciadas por piso ecológico y tipo de ecosistema. De esta forma, han ocurrido casos de titulación de tierras que cumplen con una función ecológica estratégica, como áreas de vocación forestal, zonas de bofedales, corredores biológicos y cabeceras de cuencas hídricas sin las restricciones adecuadas del uso de suelo. Esto ha resultado en la deforestación y la degradación ambiental de estas áreas. Para evitar y mitigar este impacto, como parte del Programa se realizará **un análisis de las servidumbres ecológicas en función de los pisos ecológicos y ecosistemas**, con el objetivo de contar con una adecuada caracterización de las áreas que cumplen funciones ecológicas estratégicas. Como parte de la inclusión de criterios ambientales en la verificación de la FES, el fortalecimiento del sistema nacional de monitoreo de uso del suelo y de la propuesta para la implementación del Catastro Ambiental Rural, se priorizará la preservación de estas áreas.

Impactos ambientales negativos acumulativos

- 5.9 **Deforestación por el aumento de la producción agropecuaria.** Con la caída en los precios de los hidrocarburos, el gobierno boliviano ha identificado en el año 2015 el aumento de la producción agropecuaria como una estrategia alternativa para la exportación y para el crecimiento económico. La titulación de tierras ha sido definida como elemento clave en esta estrategia, ya que brindaría la seguridad jurídica para que

medianos productores y empresas puedan tener acceso a los créditos formales necesarios para invertir en sus tierras. El aumento de la producción se daría tanto a través de mejoras tecnológicas que incrementan la productividad de tierras cultivadas, cuánto a través de la incorporación de nuevas tierras a la producción agropecuaria. Un importante riesgo asociado a esta estrategia es el desmonte de áreas extensivas en propiedad de medianos productores y empresas, y actualmente cubiertas por bosques. La expansión de la frontera agrícola ha sido definida como una prioridad por parte del gobierno boliviano durante la Cumbre Agropecuaria de abril del 2015. Medidas implementadas para estimular el aumento de la producción han sido la suspensión de la verificación de la FES por un periodo de cinco años, hasta el año 2019; y la Ley 337 del año 2013, que regulariza desmonte ilegales en cambio a multas y reforestación parcial. Esta potencial deforestación representa un impacto acumulativo asociado a las políticas agrarias contempladas por el gobierno boliviano; la insuficiente capacidad de monitoreo y fiscalización de las leyes forestales y ambientales; los aumentos en los precios de productos agropecuarios de exportación y dinámicas agropecuarias.

- 5.10 La deforestación asociada a la expansión de la frontera agropecuaria y la verificación de la FES también tiene potenciales impactos acumulativos adicionales, como a) **la fragmentación del paisaje y la afectación a los corredores de biodiversidad**; b) **el mal manejo de cabeceras de cuenca**; c) **la pérdida de funciones ambientales**; d) **la pérdida de cobertura vegetal original**; y e) **la pérdida de biodiversidad**.
- 5.11 El análisis de los escenarios de deforestación realizado como parte de la EASE ha evidenciado que las medidas para estimular la expansión de la producción agropecuaria discutidas en el párrafo anterior resultarían en un escenario de deforestación significativamente mayor hacia el año 2025. Sin embargo, también identificó que en el escenario de la adecuada implementación y verificación de la normativa actual el resultado sería en un grado de deforestación menor en términos absolutos. Más importante todavía, este escenario indica que la deforestación como parte de la expansión de la frontera agropecuaria se daría en áreas legalmente permitidas. Así, se redireccionaría la actual deforestación – en áreas ambientalmente frágiles y que cumplen funciones ecológicas estratégicas – hacia áreas de limitada importancia ambiental. Una de las conclusiones principales de la EASE es que la normativa nacional actual es adecuada para . La brecha existente se encuentra en los instrumentos y la capacidad institucional para su implementación.
- 5.12 El Programa contribuirá a este escenario a través medidas que aumentan la capacidad del INRA y otras entidades del Gobierno de Bolivia de implementar la normativa actual de forma adecuada. Estas medidas incluyen las propuestas para la **actualización de los instrumentos de verificación de la FES** discutidas anteriormente, con el objetivo que permitan identificar y reconocer de forma adecuada otros usos que no sean agropecuarios; incorporar criterios ambientales; definir la carga animal ambientalmente sostenible en función del piso ecológico y ecosistema; y revisar y agilizar los trámites para la autorización para los otros usos de la FES. El Programa también contribuirá a la **actualización de los Planes de Uso de Suelo (PLUS)** y al **fortalecimiento del sistema nacional de monitoreo de la cobertura vegetal**, como discutido anteriormente.
- 5.13 El Programa, además, propondrá nuevos instrumentos de gestión ambiental, en particular el desarrollo de un **Catastro Ambiental Rural**, como discutido anteriormente. Finalmente, el Programa financiará un **estudio estratégico de escenarios de la ampliación de la frontera agropecuaria**, con el fin de analizar de forma más detallada

las dinámicas de expansión y mejor adecuar las medidas diseñadas como parte del Programa para mitigar el riesgo de deforestación.

- 5.14 Es importante resaltar que el enfoque del Gobierno de Bolivia en relación a la expansión de la frontera agropecuaria ha cambiado en el año 2016. Como parte de los compromisos asumidos por parte del Gobierno en la COP21 de París en diciembre 2015, se han adoptado nuevos enfoques ambientales y de prevención a la deforestación, que han sido plasmados en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 del Gobierno de Bolivia. Con este nuevo enfoque, y las medidas de gestión ambiental asociadas, el grado y la probabilidad que el riesgo de deforestación asociada a la expansión de la frontera agropecuaria se materialice se redujeron de forma significativa.
- 5.15 De esta forma se ha evaluado que el riesgo de deforestación por la expansión de la frontera agropecuaria asociado al proceso de titulación de tierras es relativamente bajo, y que existen medidas adecuadas para evitar y mitigar este riesgo. Además, se evidenció que los niveles de deforestación serán menores con la implementación de las medidas de gestión ambiental propuestas por el Programa que sin la ejecución del Programa.

Impactos ambientales positivos

- 5.16 **Reducción absoluta de la deforestación.** Como identificado durante la EASE, las medidas del Programa que contribuyen a la adecuada implementación de la normativa actual resultarán en una reducción de la deforestación en términos absolutos. Medidas relevantes incluyen la actualización de los instrumentos de verificación de la FES, la actualización de los PLUS, el fortalecimiento del sistema nacional de monitoreo de la cobertura vegetal, y el desarrollo del Catastro Ambiental Rural.
- 5.17 **Direccionamiento de la deforestación hacia áreas legalmente permitidas.** Las medidas propuestas por el Programa también contribuirán a direccionar la deforestación como parte de la expansión de la frontera agropecuaria hacia zonas legalmente permitidas, reduciendo impactos sobre áreas ecológicas estratégicas y ambientalmente frágiles.
- 5.18 **Mantenimiento de corredores de biodiversidad y preservación de funciones ecológicas.** La inclusión de criterios ambientales en la verificación de la FES, la aplicación de los PLUS actualizados, y el desarrollo del Catastro Ambiental Rural contribuirán a mantener en existencia corredores de biodiversidad y a preservar funciones ecológicas estratégicas.

Impactos sociales negativos directos

- 5.19 **Agudización y emergencia de conflictos sobre la tierra.** Existen en la actualidad muchos conflictos locales y regionales en torno a la tenencia, acceso y uso de la tierra. Al codificar derechos sobre la tierra, el proceso de saneamiento y titulación de la tierra tiene el potencial de agudizar conflictos existentes, reactivar conflictos latentes, y resultar en la emergencia de nuevos conflictos. Históricamente los conflictos sobre la tierra se han dado principalmente en áreas con escasez de tierras, como el Altiplano, y en áreas de expansión de producción agropecuaria y de colonización, como los llanos del Oriente y de la Amazonia.
- 5.20 El INRA cuenta con una Unidad de Resolución de Conflictos y una estrategia de resolución de conflicto en los procesos de titulación, enfocada en la conciliación en campo por parte del personal de las brigadas de saneamiento. En el caso de que la

conciliación no sea exitosa, el saneamiento de la parcela en cuestión es suspendida hasta que las partes involucradas encuentren una solución. En muchos casos, esto significa que el caso pasa a los canales jurídicos, en particular el Tribunal Agroambiental, lo que genera importantes atrasos y costos económicos para las partes involucradas. En la práctica, los mecanismos que tiene el INRA no son suficientes para atender la complejidad de los conflictos y de los procesos de resolución, por lo que los conflictos tienden a acumularse. En la actualidad, la titulación en aproximadamente 2.5 millones de hectáreas se encuentra paralizada por conflictos. Se estima que en el área remanente por titular la proporción de parcelas que son objeto de conflicto es alta, ya que se trata principalmente de áreas de las tierras altas con minifundio, donde la incidencia de conflictos sobre la tierra es particularmente alta. De esta forma, los conflictos sobre la tierra representan también un riesgo significativo para la culminación del proceso de titulación en Bolivia, así como para el cumplimiento de las metas de titulación del Programa.

- 5.21 Para mitigar este impacto y riesgo, como parte del Programa se ha diseñado una **estrategia integral de apoyo a la resolución de conflictos sobre la tierra**. Se realizará una sistematización de las dinámicas de conflictos sobre la tierra en Bolivia, de las formas consuetudinarias de resolución de conflicto entre las poblaciones indígenas y campesinas, y de las experiencias del INRA en resolución de conflicto. Esto resultará en el desarrollo y la implementación de un programa de **capacitación en resolución de conflictos al personal del INRA**, enfocado en la aplicación de formas consuetudinarias de resolución de conflicto.
- 5.22 También se conformarán **brigadas especializadas de resolución de conflicto**, conformadas por personal con larga trayectoria en saneamiento de tierras y resolución de conflicto en campo. Estas brigadas se dedicarán exclusivamente a la resolución de expedientes de situaciones de conflicto que no se han podido resolver a través de los procedimientos de mediación que son parte de las actividades ordinarias de saneamiento.
- 5.23 Finalmente, se **fortalecerá la capacidad de resolución de conflictos del Tribunal Agroambiental**, el órgano judicial competente en materia de conflictos sobre la tierra. Se pretende apoyar al Tribunal Agroambiental para agilizar los procedimientos de resolución de conflicto, uniformizar los criterios aplicados, e incluir criterios ambientales en los procesos de toma de decisión.

Impactos sociales negativos indirectos

- 5.24 **Disminución de control sobre la tierra.** Aunque la titulación de tierras tiene como objetivo brindar a los propietarios rurales seguridad jurídica y mayor control sobre sus tierras, también puede resultar en la venta de tierras por parte de pequeños propietarios individuales que se ven presionados por la falta de condiciones económicas para sostener su tierra. Otras experiencias en América Latina también revelan que la titulación puede resultar en una disminución de la capacidad de los propietarios individuales para retener sus tierras. Evaluaciones del BID¹ y del Banco Mundial² indican que la creación de un mercado de tierras a través de programas de titulación en algunos casos ha ido de la mano con presiones e incentivos a pequeños propietarios para vender sus tierras, lo que ha dado como resultado la concentración de la tierra.

¹ Office of Evaluation and Oversight (2014): *Land Regularization and Administration Projects*. IDB: Washington DC.

² Grünberg, Jorge et al (2012): *Tierra e Igualdad: desafíos para la Administración de Tierras en Petén, Guatemala*. Guatemala: TFESSD & Banco Mundial.

- 5.25 Evitar este riesgo depende de políticas públicas adicionales que están fuera del alcance y control del Programa. Sin embargo, el Programa contribuirá a mitigar este riesgo a través la elaboración de una **propuesta de actualización de la clasificación de la pequeña propiedad**, para incrementar la proporción de propietarios individuales que pueden acceder a créditos formales. También se ha incluido la **provisión de información** a los beneficiarios de la titulación, durante los actos de entrega de títulos, sobre proyectos productivos y el seguro agrícola que impulsa el Gobierno de Bolivia. De esta forma se pretende fortalecer su capacidad de generar ingresos sostenibles, así como su resiliencia a situaciones de adversidad económica y ambiental.

Impactos sociales negativos acumulativos

- 5.26 **Avasallamiento de las tierras indígenas por actores externos.** Se ha identificado en la actualidad la existencia de avasallamientos significativos a las tierras indígenas colectivas de los Territorios Indígena Originario Campesino (TIOC) de las tierras bajas por parte de actores externos, en particular madereros, ganaderos y comunidades interculturales. La expansión de la frontera agrícola estimulada por el Gobierno de Bolivia y facilitada por la titulación de tierras implica el riesgo de un aumento adicional de la presión sobre los TIOC, en los casos en que se desmonten los bosques que actualmente sirven de *buffer*. Esto puede resultar en avasallamientos o acuerdos informales sobre el uso de la tierra dentro de los TIOC entre las comunidades y terceros.
- 5.27 Para mitigar este impacto y fortalecer la capacidad de los pueblos indígenas viviendo en los TIOC de hacer frente a potenciales avasallamientos y otros riesgos, el Programa financiará el **desarrollo de Planes de Gestión Territorial Indígena** (PGTI). Los PGTI son los instrumentos legalmente reconocidos de gestión territorial en los TIOC. Se sistematizará experiencias existentes en la elaboración y ejecución de PGTI, y se actualizará el marco conceptual de la Gestión Territorial Indígena. Además, se elaborarán ocho PGTI en TIOCs cuya titulación el Programa culminará, seleccionados bajo criterios de vulnerabilidad. Finalmente, se **fortalecerá la capacidad de la Unidad de Gestión Territorial Indígena** del Vice-Ministerio de Tierras.

Impactos sociales positivos

- 5.28 Los procesos de titulación de tierras tienen un alto potencial de generar impactos positivos directos e indirectos para sus beneficiarios. Un objetivo e impacto positivo principal del Programa es aumentar la **seguridad jurídica y la afirmación de derechos** individuales y colectivos sobre la tierra, a través la culminación de la titulación de tierras en Bolivia.
- 5.29 El **acceso a créditos formales** por parte de propietarios de parcelas tituladas individualmente les permitirá invertir para mejorar la infraestructura (riego, vías), el equipamiento, insumos agropecuarios (semillas, animales mayores y menores) y el desarrollo tecnológico. Esto a su vez contribuye al aumento de la productividad y a la generación de ingresos.
- 5.30 El Programa facilitará la **consolidación de los territorios colectivos** de las poblaciones indígenas, originarias y campesinas en tierras altas y bajas, a través la culminación de la titulación de los TIOC y las comunidades campesinas, y la elaboración de los PGTI.
- 5.31 Los procesos de titulación **fortalecerán la gestión territorial** en tierras colectivas de poblaciones indígenas y contribuirán al aumento de la sostenibilidad económica y ambiental del uso del suelo, así como a la mejora en su calidad de vida, a través la

- elaboración de los PGTI y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las TIOC beneficiadas.
- 5.32 **Se incrementará la titulación de tierras a favor de las mujeres**, a través la inclusión del nombre de la mujer en los títulos propietarios. También se fortalecerá el ejercicio efectivo de las mujeres de su derecho sobre la tierra, a través campañas informativas sobre sus derechos y los beneficios asociados a la titulación, y la adopción de un enfoque de género de forma transversal en la titulación de tierras y otras actividades del INRA.
- 5.33 **Resolución de conflictos sobre la tierra**, a través la implementación de los mecanismos de resolución discutidos anteriormente.
- 5.34 La **redistribución equitativa de la tierra** entre los sectores sociales que más la necesitan. Durante la llamada “Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria”, desde el año 2006 a la actualidad, se ha puesto particular énfasis en la titulación y la redistribución de tierras en beneficio de poblaciones indígenas, campesinos y pequeños productores, respondiendo a reivindicaciones históricas por parte de estos sectores de la población boliviana. Como parte del Programa se prevé beneficiar a una importante proporción de estos sectores. En las tierras altas, los beneficiarios serán principalmente pequeños agricultores y ganaderos de origen Aymara y Quechua, mientras que en el departamento de Santa Cruz los beneficiarios incluyen pequeños agricultores, TIOCs y comunidades.

Problemas estructurales y temas críticos en la tenencia de la tierra.

- 5.35 **Titulación incompleta de la demanda territorial de pueblos indígenas y fragmentación del territorio.** En los años 1990 se han identificado los territorios de los pueblos indígenas de tierras bajas en base a una estimativa de las necesidades territoriales en función del número poblacional, así como sus límites indicativos. Se han conformado las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), denominadas posteriormente Territorios Indígena Originario Campesino (TIOC). Sin embargo, muchas TCO contaban ya con la presencia de terceros no-indígenas dentro de sus límites. A partir del año 2006, se hicieron importantes avances en la titulación de las TCO, con la culminación de la titulación en la mayoría de ellas. La demanda remanente actual de los pueblos indígenas de tierras bajas consiste principalmente en tierras con presencia de terceros. Por la normativa nacional, si estos terceros pueden demostrar su tenencia de la tierra hasta antes del año 1996, esta es considerada legalmente legítima, y la tierra se debe titular a nombre de ellos. De esta forma, existe el riesgo de incumplimiento de la titulación de la demanda completa de las poblaciones indígenas de tierras bajas, así como la fragmentación de sus territorios.
- 5.36 La incidencia del proceso de saneamiento y titulación sobre esta situación es neutra, ya que se limita a formalizar una realidad existente. Sin embargo, el Programa contribuirá a manejar esta realidad y sus riesgos asociados de forma adecuada, e identificará soluciones a problemas estructurales. Se implementarán **mecanismos participativos** de saneamiento y titulación de las áreas remanentes de las TIOC a través la **reactivación de los Consejos Interinstitucionales de Tierras Comunitarias de Origen (CITCO)**. Se planificará el saneamiento de áreas de terceros y de áreas en conflicto de forma participativa con las autoridades de las TIOC y de las principales organizaciones indígenas de tierras bajas, en base a acuerdos de conformidad sobre los planes de titulación. La ejecución de los planes contará con la participación de representantes de las TIOC en cuestión. De esta forma se pretende asegurar que la titulación de terceros solo se dé en casos legalmente permitidos y que cumplen con la FES, y cuya legitimidad es reconocida por las TIOC en cuestión. Para fortalecer la

- capacidad del INRA de llevar a cabo este proceso de manera culturalmente adecuada, se implementarán medidas para la **incorporación transversal de un enfoque de interculturalidad** en las actividades del INRA.
- 5.37 Además, al culminar el proceso de titulación de las TIOC, el Programa financiará un **estudio estratégico territorial** para a) analizar el grado de cumplimiento de la demanda y de las necesidades territoriales de las poblaciones indígenas, así como el grado de fragmentación de sus territorio; b) identificar eventuales demandas no cumplidas y problemas estructurales persistentes, así como sus potenciales soluciones; y c) hacer propuestas para nuevas políticas públicas para la gestión territorial de las TIOC.
- 5.38 **Parcelación de tierras colectivas en comunidades campesinas.** En los últimos años ha habido una demanda creciente por parte de comunidades campesinas de ser tituladas a nombre de familias individuales, en vez de como un territorio colectivo. Esto se ha dado principalmente en comunidades más cercanas a áreas urbanas, con una mayor inserción en la economía del mercado, una mayor tasa de migración temporaria o permanente hacia ciudades y otras partes del país, y un debilitamiento de la organización comunitaria. El proceso de titulación de tierras conducido por el INRA no puede incidir en esta tendencia, ya que se trata de una decisión soberana de la comunidad a través asamblea comunitaria, y que es legalmente permitida. Sin embargo, el Programa puede contribuir a la toma de decisiones que sean adecuadas para la comunidad, a través la **provisión de información** sobre las ventajas y desventajas de las opciones de titulación colectiva e individual.
- 5.39 **Propagación del minifundio a través la fragmentación de la pequeña propiedad** en las tierras altas y los valles. Este proceso es el resultado de la sucesión hereditaria, y la práctica cultural de dividir la herencia de las tierras entre todos los hijos. A su vez, la gradual minifundización tiene importantes impactos sociales y ambientales negativos, que incluyen: a) aumento de la intensidad del uso de la tierra y la relacionada reducción de la productividad de la tierra; b) conflictos sobre el acceso a recursos naturales, como el agua y áreas de pastoreo; c) profundización de la pobreza rural; d) aceleración de los procesos de migración hacia las ciudades y áreas de colonización, así como el abandono de tierras y la feminización del campo.
- 5.40 La incidencia del proceso de saneamiento y titulación sobre la propagación del minifundio es neutra, ya que se limita a formalizar una situación existente. Además, la titulación de la pequeña propiedad fragmentada corresponde a una demanda legítima por parte de los propietarios. Sin embargo, el Programa contribuirá a mejor identificar las dinámicas de la minifundización y eventuales soluciones estructurales, así como a desarrollar nuevas propuestas de políticas públicas, a través la realización de un **estudio estratégico sobre el minifundio**.
- 5.41 Persistencia de la **desigualdad de género en el acceso y el uso de la tierra**. A pesar de los avances normativos de los últimos años, en particular el registro obligatorio de los nombres de ambos conyugues en los títulos de propiedad, persiste el rol histórico dominante de los hombres en el uso de la tierra y la gestión territorial. Las mujeres además tienen una participación limitada en los procesos de titulación de tierra. Esto se debe de manera significativa a las normas y prácticas consuetudinarios de poblaciones indígenas y campesinas en materia de acceso y uso de la tierra. La EASE identificó que esta asimetría también se encuentra reflejada en un sesgo masculino en la institucionalidad y las prácticas del INRA.
- 5.42 El Programa contribuirá a disminuir las asimetrías de género en las prácticas del INRA, a través el **fortalecimiento de la Unidad de Género y Comunicación** y la adopción de medidas para incluir un **enfoque de género de forma transversal** en las

responsabilidades y actividades de la institución. También contribuirá a disminuir la desigualdad de género en el acceso y uso de la tierra, a través la adopción de una **estrategia de comunicación con un enfoque transversal de género**. Entre otros, se promocionará el conocimiento y el ejercicio de sus derechos sobre la tierra por parte de las mujeres, el conocimiento de los beneficios asociados a la titulación, y el acceso a programas productivos del Gobierno de Bolivia.

- 5.43 **Normas y procedimientos.** Según información brindada por el INRA, la normativa vigente en materia de titulación de tierra y control sobre el uso de la tierra, así como los procedimientos actuales de titulación, no están del todo alineados con la realidad social en la que los procesos de titulación intervienen. Como resultado, se producen cuellos de botella, atrasos y una implementación incompleta de la normativa. En los últimos años, el INRA ha reducido los procedimientos de titulación de 45 a 15 pasos. Durante la preparación del Programa, se analizará el marco normativo, así como los manuales y protocolos existentes, y se hará una propuesta para revisar y mejorar las normas y los procedimientos.
- 5.44 **Riesgos reputacionales.** El riesgo de una **deforestación** en escala considerable como efecto combinado de la titulación de tierras con una política de expansión de la frontera agraria representa un riesgo reputacional para el Banco. Sin embargo, como discutido anteriormente, la probabilidad que este riesgo se materialice es relativamente bajo, y el Programa implementará una serie de medidas para reducirlo. La posibilidad **incumplimiento de la titulación de la demanda integral de las poblaciones indígenas** de tierras bajas constituye otro riesgo reputacional para el Banco. Sin embargo, como discutido anteriormente, este riesgo se limita a través la adopción de mecanismos participativos de titulación con la inclusión de las poblaciones indígenas respectivas, y su consentimiento con las medidas propuestas expresado durante la consulta pública.

VI. GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PROGRAMA

- 6.1 Como resultado de la EASE, se ha elaborado un **Plan de Gestión Ambiental y Social** del Programa con medidas destinadas a mitigar los riesgos e impactos identificados. El PGAS, además, incluye medidas estratégicas para contribuir a la gestión sustentable de la tierra, así como a la inclusión de enfoques de género e interculturalidad de forma transversal en el proceso de titulación. Las actividades de gestión ambiental y social a financiar se organizan en las siguientes líneas de acción:

6.2 Instrumentos de gestión ambiental.

Propuesta de actualización de los instrumentos de verificación de la Función Económica Social (FES):

- Instrumentar la verificación de los Otros Usos en la FES e incorporar criterios ambientales
- Actualización de la FES en lo referido a la carga animal
- Revisión de los trámites para autorizaciones para los otros usos de la FES.

Catastro y monitoreo ambiental:

- Definición del marco conceptual y viabilidad del Catastro Ambiental Rural
- Desarrollo de propuesta del Sistema Nacional de Catastro Ambiental Rural

- Análisis de las servidumbre ecológicas en función de los pisos ecológicos y ecosistemas.
- Estudio de escenarios de ampliación de la frontera agropecuaria
- Propuesta de fortalecimiento del sistema nacional de monitoreo de cobertura vegetal.

6.3 Instrumentos de gestión social.

Propuesta de actualización de la clasificación de la pequeña propiedad.

Gestión Territorial Indígena:

- Estudios estratégicos sobre el minifundio y la titulación de las TIOC
- Reactivación de los CITCO y acuerdos participativos para la titulación de las TIOC.
- Elaboración de 8 Planes de Gestión Territorial Indígena

Gestión Intercultural de Conflictos:

- Capacitación del personal del INRA en resolución intercultural de conflictos
- Brigadas de resolución de conflictos
- Fortalecimiento de capacidades del Tribunal Agroambiental para la resolución de conflictos

Género, interculturalidad y comunicación:

- Transversalización de los enfoques intercultural y de género
- Fortalecimiento de la Unidad de Género del INRA
- Diseño e implementación de una estrategia de comunicación con enfoque de género e interculturalidad

Mecanismo de atención al usuario:

- Desarrollo de un mecanismo de captación y resolución de quejas y reclamos
- Fortalecimiento de la Unidad de Transparencia del INRA

6.4 La implementación del PGAS se financiará a través el componente 2 del Programa *Administración de Tierras*, con la excepción de las medidas relacionadas a la gestión de conflictos, que se financiarán a través el componente 1 *Saneamiento, titulación y registro de tierras*, en razón de su estrecha relación con el cumplimiento de las metas de titulación. Específicamente, las medidas financiadas por el componente 1 son a) las medidas de gestión intercultural de conflictos; b) las medidas del mecanismo de atención al usuario; y c) la reactivación de los CITCO y los acuerdos participativos.

6.5 El PGAS incluye una descripción detallada de cada una de estas medidas, incluyendo su justificación y su relación con los impactos identificados. Además contiene para cada medida una ficha técnica, como ejemplificado a continuación para la medida de elaboración de Planes de Gestión Territorial Indígena:

Denominación	Planes de Gestión Territorial Indígena
---------------------	--

Objetivo:	Apoyar al Viceministerio de Tierras en las acciones previstas para impulsar el proceso de elaboración de Planes de Gestión Territorial Indígena en TIOC en proceso de saneamiento pueblos indígenas en situación de vulnerabilidad.
Metas	Priorizan acciones para la Gestión Territorial Indígena en TIOC en proceso de saneamiento .
Ámbito de aplicación	Territorios Indígena Originario Campesinos
Beneficiarios:	Territorio Indígena Originario Campesino Canichana, Itonama, Joaquiniano, Guarayo, Guaraní - Takovo Mora , Weenhayek, Uru Chipaya y Araona
Responsable:	Viceministerio de Tierras – Unidad de Gestión Territorial Indígena
Acciones / Actividades:	<p>A.1. Análisis de la Función Integral Socio Ambiental</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Desarrollar el marco conceptual y los criterios técnicos para la verificación de la FS, de acuerdo a lo expresado en la normativa agraria, la normativa ambiental vigente y la normativa internacional respecto a los derechos de los pueblos indígenas b. Elaboración de la boleta de verificación de la Función Social que incorpore los criterios técnicos socio culturales y ambientales c. Proceso de sensibilización y capacitación a las brigadas para el empleo de la boleta aplicando los criterios socio ambientales incorporados en ella
	<p>A.2. Actualización del marco conceptual de la Gestión Territorial Indígena.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Talleres de consulta con las organizaciones indígenas, sistematización de experiencias b) Elaboración del marco conceptual en base a los criterios y experiencias de las organizaciones indígenas.
	<p>A.3. Adecuación con la normativa de Planificación Territorial Nacional, Departamental y Municipal</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Revisión de la normativa b) Identificación de elementos para la articulación de los Planes de Gestión Territorial Indígena a los procesos de planificación nacional, departamental y municipal.

	<p>A.4. Evaluación del estado de elaboración, implementación y ejecución de los Planes de Gestión Territorial Indígena y Planes de Vida existentes, sistematización de lecciones aprendidas y buenas prácticas.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Talleres de evaluación con las organizaciones matrices y con los representantes de los pueblos indígenas en situación de vulnerabilidad. b) Talleres de evaluación con las TIOC de los pueblos indígenas Canichana, Itonama, Joaquiniano, Guarayo, Takovo Mora, Weenhayek, Uru Chipaya y Araona. c) Sistematización de experiencias. d) Elaboración del documento de evaluación.
	<p>A.5. Priorización de necesidades de Gestión Territorial Indígena en TIOCs en coordinación con CIDOB y CONAMAQ (atendiendo de manera preferente a las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos en situación de vulnerabilidad)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Reuniones de Coordinación y definición de necesidades de Gestión Territorial para los pueblos indígenas Canichana, Itonama, Joaquiniano, Guarayo, Guaraní, Weenhayek, Uru Chipaya y Araona.
	<p>A.6. Elaboración de 8 Planes de Gestión Territorial Indígena de acuerdo a la priorización realizada y con adecuación cultural de acuerdo al pueblo indígena priorizado.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Elaboración participativa de los Planes de Gestión Territorial Indígena b) Fortalecimiento de capacidades en los Pueblos Indígenas en planificación estratégica, monitoreo y seguimiento en la implementación de los PGTI. c) Fortalecimiento de las capacidades del Viceministerio de Tierras para el apoyo en la elaboración de Planes de Gestión Territorial de los TIOCs que lo demanden. c) Validación del PGTI con el pueblo indígena beneficiario.
Indicadores	<p>I.1. Marco conceptual desarrollado incorporando los criterios socio ambientales</p> <p>I.2. Marco conceptual actualizado para la Gestión Territorial Indígena</p> <p>I.3. Propuesta de articulación de los PGTI con los mecanismos de planificación territorial</p> <p>I.4. Estado del arte sobre los PGTI en las TCOs de tierras altas y bajas</p> <p>I.5. Priorización de elaboración de PGTI para los pueblos indígenas Canichana, Itonama, Joaquiniano, Guarayo, Guaraní, Weenhayek, Uru Chipaya y Araona.</p> <p>I.6. Planes de Gestión validados</p>
Medios de verificación	<p>M.V.1. Actas de los Talleres, documento de sistematización, Documento de Marco Conceptual</p> <p>M.V.2. Documento técnico de la propuesta de articulación</p> <p>M.V.3. Documento de evaluación</p> <p>M.V.4. Documento de priorización</p> <p>M.V.5 Documento del Plan de Gestión Territorial / Actas de los Talleres / Acta de</p>

	Aprobación				
Recursos humanos	<p>Para A.1: Empresa Consultora</p> <ul style="list-style-type: none"> • Especialista jurídico en temática agraria • Especialista en sistemas de información geográfica • Especialista socio cultural • Articulador social. <p>Para A.2 – A.5: Empresa Consultora Interdisciplinaria con experiencia en gestión territorial y de recursos naturales con personal mínimo requerido.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Especialista Socio Ambiental • Especialista Legal • Facilitador de campo <p>Para la A.6: Empresa Consultora con experiencia en la formulación de Planes de Gestión Territorial, Planes de Manejo de Áreas Protegidas, con personal mínimo requerido:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Especialista en Planificación • Especialista en Sistemas de Información Geográfica • Especialista en Gestión de Recursos Naturales • Especialista en Sistemas Productivos • Especialista Socio Cultural en temas indígenas • Especialista en Economía de Recursos Naturales • Especialista en Derechos Indígenas • Técnicos de campo • Facilitadores. 				
Presupuesto	<p>Para A.1: US\$ 25.000</p> <p>Para A.2-A.5: \$US 125.000</p> <p>Para A.6: \$US 960.000</p> <p>Para apoyo a VT con Personal: US\$ 1800*60 (meses)</p>				
Resultado(s) esperado(s)	R.1				
	R.2. Marco conceptual actualizado				
	R.3. Incorporación de los PGTI en los sistemas de planificación Nacional, Departamental, Municipal				
	R.4. Diagnóstico del estado de situación de los PGTI				
	R.5. Informe de priorización para la elaboración de PGTI para los pueblos indígenas Canichana, Itonama, Joaquiniano, Guarayo, Guaraní - Takovo Mora , Weenhayek.				
	R.6. Planes de Gestión Territorial Indígena elaborados				
Cronograma	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5

	X	X	X	X	X
Condiciones de cumplimiento	<p>Compromiso Institucional</p> <p>Compromiso Gubernamental para el apoyo y seguimiento en la implementación de los Planes de Gestión Territorial a mediano y largo plazo, en la medida que los Pueblos Indígenas puedan desarrollar sus capacidades productivas y garanticen la continuidad en la implementación del Plan.</p> <p>Disponibilidad de recursos más allá del horizonte de ejecución del Proyecto.</p>				

- 6.6 **Reglamento Operativo del Programa.** La ejecución del Programa se regirá por un Reglamento Operativo del Programa (ROP), que establece directrices y procedimientos operativos. El ROP incluirá los procedimientos y las normas para la gestión social y ambiental elaborados en el PGAS. Será condición contractual previa al primer desembolso, la entrada en vigencia del ROP, en los términos previamente acordados con el Banco.
- 6.7 **Monitoreo.** Dado que las medidas de gestión social y ambiental han sido incorporadas en su integralidad en el diseño del Programa, el monitoreo de su cumplimiento se hará a través el plan de monitoreo y evaluación del Programa. Las fichas de las medidas de gestión social y ambiental del PGAS incluyen indicadores para el seguimiento de su implementación. La Unidad Ejecutora (UE) del Programa elaborará y enviará al Banco, a más tardar 60 días después del fin de cada semestre durante la ejecución del proyecto, un informe de seguimiento. Estos informes se focalizarán en el cumplimiento de los indicadores de productos y los avances en resultados, la identificación de problemas encontrados y las medidas correctivas adoptadas. Adicionalmente, la UE realizará dos evaluaciones independientes financiadas con recursos del préstamo: (i) la evaluación intermedia será presentada al Banco a más tardar 90 días después de que se haya ejecutado el 50% de los recursos del préstamo; y (ii) la evaluación final, a más tardar 90 días después de que se haya ejecutado el 90% de los recursos del proyecto. Estos informes incluirán una evaluación de la calidad de los datos del sistema de seguimiento, el grado de cumplimiento de los productos, resultados y avances de los impactos esperados establecidos en MR, así como el nivel de cumplimiento del PGAS, incluyendo avances en los indicadores sociales y ambientales.
- 6.8 **Fortalecimiento institucional.** Como parte del PGAS, se implementará un plan de fortalecimiento institucional para garantizar las capacidades necesarias para la adecuada gestión social y ambiental. Se contratará como parte de la UE un especialista social y un especialista ambiental para coordinar la implementación de las medidas sociales y ambientales del Programa. Se contratará un(a) especialista de género para fortalecer la Unidad de Género y Comunicación del INRA. Se contratará personal para el fortalecimiento de la Unidad de Transparencia del INRA y la implementación del mecanismo de resolución de quejas. Se fortalecerá la Unidad de Resolución de Conflictos del INRA a través un programa de capacitación y la conformación de brigadas de resolución de conflictos. Se fortalecerá la Unidad de Gestión Territorial Indígena del Vice-Ministerio de Tierras a través la contratación de un especialista en gestión territorial indígena. Se fortalecerá el Tribunal Agroambiental a través un programa de capacitación.
- 6.9 **Coordinación interinstitucional.** El Programa prevé el fortalecimiento de la coordinación entre las diferentes instituciones del Gobierno de Bolivia involucradas en el Programa – principalmente el INRA, la ABT, el Vice-Ministerio de Tierras y Derechos Reales – a través la constitución de convenios y la elaboración de planes de trabajo

conjuntos. También prevé la coordinación con las organizaciones sociales representativas de los beneficiarios de la titulación a través la activación de consejos interinstitucionales y la realización de reuniones periódicas. El PGAS prevé la coordinación entre el INRA y los gobiernos departamentales y municipales para verificar la existencia de áreas de conservación de carácter municipal o departamental sobre tierras fiscales en proceso de ser declaradas disponibles.

- 6.10 **Mecanismo de resolución de quejas.** Para garantizar una atención adecuada a los beneficiarios la titulación de tierras y la pronta resolución de eventuales quejas, el Programa diseñará e implementará un mecanismo de captación y resolución de quejas y reclamos. Además fortalecerá a la Unidad de Transparencia del INRA para la operación de este mecanismo.
- 6.11 **Adicionalidad del Banco.** El mandato institucional y legal actual del INRA está enfocado en el saneamiento y la titulación de la tierra. Está previsto que estas actividades culminen durante la vigencia del Programa. Una contribución clave del Programa es contribuir a la transición del INRA hacia una nueva función institucional una vez culminado el proceso de titulación, enfocado en la gestión sostenible de la tierra. Con su presencia en campo, su acceso privilegiado a las parcelas individuales y tierras colectivas, así como su posesión de información detallada sobre la tierra, el INRA está particularmente bien posicionada para cumplir esta función.
- 6.12 Durante la elaboración del diseño del Programa, el Banco también recomendó la introducción de una serie de medidas dirigidas de forma particular a la gestión social y ambiental. Se incluyeron entre otros los siguientes elementos, discutidos en mayor detalle en otras secciones de este documento: a) un mecanismo de gestión intercultural de conflictos; b) la elaboración de Planes de Gestión Territorial Indígena; c) mecanismos participativos para la titulación de tierras indígenas y campesinas; d) la transversalización de los enfoques de género e interculturalidad; e) estudios estratégicos para definir nuevas políticas públicas en relación al minifundio y la demanda territorial de pueblos indígenas; f) la inclusión de criterios ambientales en la verificación de la FES; g) el fortalecimiento del sistema de monitoreo de la deforestación; y h) el desarrollo de una propuesta para un Catastro Ambiental Rural.
- 6.13 Finalmente, el Banco apoyo al INRA en la realización de un proceso de consulta con las organizaciones sociales representativas de los beneficiarios de la titulación, incluyendo organizaciones indígenas, campesinas, interculturales y empresariales, que ha resultado en el consentimiento y apoyo al Programa por parte de estas organizaciones.
- 6.14 **Requerimientos a ser incluidos en los acuerdos legales.** Dado la inclusión integral en el componente 3 del Programa de las medidas de gestión social y ambiental del PGAS, la ejecución de estas medidas se vuelve una condición obligatoria a través el Anexo Único del acuerdo legal de préstamo. Además se requiere el cumplimiento con las siguientes condiciones previas al primero desembolso:
- La contratación de los coordinadores de los componentes del Programa, así como los especialistas en gestión social y gestión ambiental, de conformidad con los términos previamente acordados con el Banco.
 - La entrada en vigencia del Reglamento Operativo del Programa, con inclusión de las directrices y procedimientos operativos para la gestión social y ambiental, de conformidad con los términos previamente acordados con el Banco.